

**S E S I Ó N   P Ú B L I C A   NÚM. 106**  
**O R D I N A R I A**  
**MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2015**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y siete minutos del martes trece de octubre de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número ciento cinco ordinaria, celebrada el jueves ocho de octubre del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el martes trece de octubre de dos mil quince:

**I. 37/2014**

Controversia constitucional 37/2014, promovida por la Federación, por conducto del Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el doce de marzo de dos mil catorce, concretamente en cuanto a sus artículos 10, 14, 15, 17, 23, 25, 26 y tercero transitorio. En el proyecto formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 23 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas. TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 14, fracción VI, 15, 17, 10 en la porción normativa que dice “y evaluación”, 25 y 26 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas. CUARTO. Se hace extensiva la invalidez a los artículos 2º, fracciones XII, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX; 11, fracciones IX y X, 13, fracción II del apartado relativo a las facultades del Ejecutivo del Estado; 15, penúltimo párrafo, 19 y 25 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas. QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea recordó haber presentado el considerando séptimo, relativo a la extensión de invalidez y efectos.

El señor Ministro Cossío Díaz se pronunció por la extensión adicional al artículo 2, fracciones XVIII, XIX y XX, de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, por reiterar definiciones de la Ley General.

El señor Ministro Pérez Dayán estimó que cualquier repetición de la Ley General puede generar dudas, por lo que estaría de acuerdo en que se incluyera la extensión referida.

El señor Ministro Medina Mora I. recapituló que algunos señores Ministros consideran que la sola repetición literal no constituye una razón para invalidar, por lo que apoyaría el proyecto en sus términos.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea recordó que el problema de la repetición se presentó en los temas valorados como de reserva de fuente, en los cuales la sola reiteración implica una vulneración. En el caso, adelantó que no tendría inconveniente en incluir estos preceptos, aunque quizás no sean por sí mismos inconstitucionales, sino para invalidarlos como sistema.

La señora Ministra Luna Ramos coincidió con el señor Ministro Medina Mora I. en votar en favor de la propuesta original.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando séptimo, relativo a la extensión de invalidez y efectos, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez

Ortiz Mena, Cossío Díaz inclusive por la extensión de invalidez al artículo 2, fracciones XVIII, XIX y XX, Luna Ramos, Franco González Salas salvando sus criterios en la votación de fondo en la que no participó, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo separándose de la declaración de invalidez en vía de consecuencia de los artículos 11 y 15, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas inclusive por la extensión de invalidez al artículo 2, fracciones XVIII, XIX y XX, Pérez Dayán inclusive por la extensión de invalidez al artículo 2, fracciones XVIII, XIX y XX y Presidente Aguilar Morales inclusive por la extensión de invalidez al artículo 2, fracciones XVIII, XIX y XX.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos resolutivos que regirán en el presente asunto, de la siguiente forma:

*“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 23 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas. TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 10, en la porción normativa que dice “y evaluación”, 14, fracción VI, 15, 17, 25 y 26 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, así como del artículo tercero transitorio del Decreto 440, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el doce de marzo de dos mil*

catorce. CUARTO. Se hace extensiva la invalidez a los artículos 2º, fracciones XII, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XXXIX, 11, fracciones IX y X, 13, fracción II del apartado relativo a las facultades del Ejecutivo del Estado, y 19 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas. QUINTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Chiapas. SEXTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente de la lista:

## **II. 63/2014**

Controversia constitucional 63/2014, promovida por la Federación, por conducto del Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, demandando la invalidez del Decreto 1397 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dos de abril de dos mil catorce, concretamente en cuanto a sus artículos 14 Bis, 22 Quintus y transitorios cuarto y sexto. En el proyecto formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de

Larrea se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 14 bis y 22 quintus de la Ley de Educación del Estado de Morelos, así como de las reglas cuarta y sexta transitorias del Decreto mil doscientos noventa y siete, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dos de abril de dos mil catorce. TERCERO. Se hace extensiva la invalidez a los artículos 19, 20, incisos d) y j), 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 sextus, 22 septimus, 22 octavus, 22 nonus, 22 decimus, 22 undecimus, 22 duodecimus, 22 tertius decimus, 85, 86, 87 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, así como a la regla séptima transitoria del Decreto mil doscientos noventa y siete por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dos de abril de dos mil catorce. CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea recordó haber presentado el considerando séptimo, relativo a la extensión de invalidez y efectos.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que no debería incluirse en la extensión de invalidez la regla séptima transitoria del Decreto mil doscientos noventa y siete, pues está referida a derechos adquiridos de los maestros

jubilados y pensionados, no de los maestros en activo que, por cuestiones de evaluación, puedan tener algún problema.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se apartó de incluir en la extensión de invalidez los artículos 20, 22 septimus, 22 octavus, 22 nonus, 22 decimus, 22 tertius decimus, 85 y 86, así como la regla séptima transitoria del Decreto mil doscientos noventa y siete, pues solo reiteran disposiciones de la Ley General, además de que la regla transitoria no es contraria a la Constitución.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea modificó el proyecto para no incluir la extensión de invalidez a la regla séptima transitoria del Decreto mil doscientos noventa y siete.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando séptimo, relativo a la extensión de invalidez y efectos, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas salvando sus criterios en la votación de fondo en la que no participó, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo separándose de la declaración de invalidez de los artículos 20, 22 septimus, 22 octavus, 22 nonus, 22 decimus, 22 tertius decimus, 85 y 86, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos resolutivos que regirán en el presente asunto, de la siguiente forma:

*“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 14 bis y 22 quintus de la Ley de Educación del Estado de Morelos, así como de las reglas cuarta y sexta transitorias del Decreto mil doscientos noventa y siete, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicha Ley, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dos de abril de dos mil catorce. TERCERO. Se hace extensiva la invalidez a los artículos 2, último párrafo, 19, 20, incisos d) y j), 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 sextus, 22 septimus, 22 octavus, 22 nonus, 22 decimus, 22 undecimus, 22 duodecimus, 22 tertius decimus, 82, fracción III, 85, 86 y 87 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, reformados mediante el Decreto mil doscientos noventa y siete, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dos de abril de dos mil catorce. CUARTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Morelos. QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Periódico Oficial del Estado de Morelos.”*



El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente de la lista:

**III. 64/2015 y Acs. 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015**      Acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015, promovidas por los partidos políticos nacionales Nueva Alianza, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y MORENA, y el partido político estatal Sinaloense, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el quince de julio de dos mil quince, mediante Decreto 364. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 64/2015 promovida por el Partido Nueva Alianza. SEGUNDO. Es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 65/2015 promovida por el Partido de la*

*Revolución Democrática. TERCERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 68/2015 promovida por el Partido Movimiento Ciudadano. CUARTO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 70/2015 promovida por el Partido Morena. QUINTO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 66/2015 promovida por el Partido Sinaloense, en términos del apartado IV de esta sentencia. SEXTO. Se reconoce la validez de los artículos 15, 106 párrafo tercero y 255, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. SÉPTIMO. Se declara la invalidez de los artículos 27 en la porción normativa que indica “votación efectiva”; 28; 60; 61 párrafo segundo; 65, Apartado A, segundo párrafo, inciso a) numerales 1 y 2; 65, Apartado B, párrafos primero y segundo; 69 en las porciones normativas que indican “coaliciones” tanto de su primer como de su segundo párrafo; 69, segundo párrafo en la porción normativa que indica “ofensa, difamación o ... que denigre”; 69, tercer párrafo; 91, fracción VI, en la porción normativa que indica “ofensas, difamación ... o cualquier expresión que denigre”; 105, fracción VIII, en la porción normativa que indica “ofensas, difamación ... o cualquier expresión que denigre”; 182, fracción II; 262 párrafo cuarto; 270, fracción X, en la porción normativa que indica “infamia, injuria, difamación, que pueda denigrar”; 271, fracción VII, en la porción normativa que indica “infamia, injuria, difamación o que pueda denigrar”; 272, fracción XIII, en la porción normativa*

*que indica “infamia, injuria, difamación o que pueda denigrar”; artículo 274, fracción III, en la porción normativa que indica “ofensa, difamación”, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa; así como de los artículos tercero y cuarto transitorios del “Decreto 364” publicado en el Periódico Oficial de la Entidad de quince de julio de dos mil quince. OCTAVO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.”*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II y III relativos, respectivamente, al trámite, a la competencia y a la oportunidad, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz presentó el apartado IV, relativo a la legitimación. El proyecto propone determinar que todos los partidos políticos promoventes están legitimados, salvo el Partido Sinaloense, pues quienes suscribieron la demanda no acreditaron su personalidad, de acuerdo con las consideraciones que se encuentran en los párrafos veintiocho a treinta y dos de la consulta, por lo que se debe sobreseer en la acción de inconstitucionalidad

66/2015. Adelantó que, de considerarse que no se surte esta causal y que el Partido Sinaloense está legitimado, no habría que modificar el proyecto, toda vez que lo impugnado por él también lo esgrimió el Partido Político MORENA.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó en favor de la legitimación del Partido Sinaloense, puesto que el promovente se ostentó como “Presidente del Comité Directivo Estatal”, siendo que en los estatutos del partido se prevé como “Presidente del Comité Ejecutivo Estatal”, por lo que se trata de una errata, no de una suplantación de personas, en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional.

El señor Ministro Franco González Salas agregó a lo indicado por la señora Ministra Luna Ramos que, de acuerdo con los criterios de este Tribunal Pleno, se debe ser deferente a la representación señalada, además de que no hubo oposición al respecto, siendo que, en el caso, se adjuntó copia certificada de la constancia de registro correspondiente y certificación de que el promovente es Presidente del Comité Directivo Estatal del mencionado partido político, por lo cual puede sostenerse la legitimación respectiva.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena concordó en que se trata de una errata, no de una falta de legitimación.

El señor Ministro Medina Mora I. compartió el criterio de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas y Gutiérrez Ortiz Mena, precisando que la razón del error es que el partido modificó sus estatutos con fecha posterior, pero anterior a la presentación de la demanda, por lo que resulta claro que estas personas ocupan los cargos referidos y conforme a los estatutos vigentes al momento de la presentación de la acción de inconstitucionalidad y, consecuentemente, se inclinó por el reconocimiento de la legitimación, siendo innecesario adicionar el estudio porque están atendidos adecuadamente los agravios expresados en ese sentido por otro partido.

El señor Ministro Pardo Rebolledo coincidió en que se trata de una imprecisión al momento de apuntar los cargos de los promoventes, razón por la cual está acreditada su personalidad. Manifestó la duda consistente en que, si bien el artículo en cuestión también se impugnó por otro partido político, el planteamiento del Partido Sinaloense es más amplio, entonces el proyecto tendría que partir de las facultades de la legislatura local para regular lo relacionado con el financiamiento público.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó en la misma línea expresada, por lo que se pronunciaría por la legitimación, concordando con el señor Ministro Medina Mora I. que el error deriva en el cambio de los estatutos, y con el señor Ministro Pardo Rebolledo en que debería ampliarse el análisis.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas se sumó al reconocimiento de legitimación y al enfoque más general del proyecto en los argumentos de fondo.

El señor Ministro Silva Meza se expresó de acuerdo en reconocer la legitimación y con el ajuste del proyecto.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz recapituló que el Partido Sinaloense impugnó el artículo 65, apartado A, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mientras que el Partido de la Revolución Democrática combatió el artículo 65, apartado A, párrafo segundo, inciso a), numerales 1 y 2.

Modificó el proyecto para reconocer la legitimación del Partido Sinaloense, precisando que la confusión deriva del cambio de estatutos posterior a la presentación de la acción de inconstitucionalidad, en atención al artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelantó que, en el apartado correspondiente, se harían los ajustes de fondo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado IV, relativo a la legitimación, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza,

Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz presentó el apartado V, relativo a las causas de improcedencia. El proyecto precisa que no se hicieron valer por las partes ni se advirtió alguna de oficio.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales observó que se impugnó el artículo 65, apartado A, párrafo segundo, inciso a), pero no se hicieron valer conceptos de invalidez, por lo que ameritaría sobreseimiento.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz recordó que el Partido Sinaloense impugnó el artículo 65, apartado A, en su integridad, y que el Partido de la Revolución Democrática fragmentó esa impugnación, sin embargo, no sería conveniente en este apartado calificar la improcedencia o no, sino en el apartado correspondiente al estudio de fondo de este precepto.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que el concepto de invalidez del Partido de la Revolución Democrática, sintetizado en la página seis del proyecto, refiere al artículo 65, apartado A, párrafo segundo, exclusivamente por los porcentajes, mientras que el del Partido Sinaloense, resumido en la foja once de la propuesta, lo combate a partir de la falta de competencia de la Legislatura local.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado V, relativo a las causas

de improcedencia, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz presentó el apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos. Preciso que este apartado fue dividido en diez temas, de los cuales algunos contienen una propuesta de extensión de invalidez, siendo que dichas extensiones se reservarían tras la declaración de invalidez del fondo.

Enunció que en el tema 1: sistema de conteo de votos para partidos políticos que participen en candidatura común, el proyecto propone declarar la invalidez del artículo 61, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, con base en los precedentes de la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, así como la acción de inconstitucionalidad 39/2014 y sus acumuladas 44/2014, 54/2014 y 84/2014, en los cuales se resolvió que la norma resulta inconstitucional, ya que determinar no tomar en cuenta los votos válidamente emitidos en favor de dos o más partidos unidos en una candidatura común, marcados en la boleta electoral, necesariamente impacta en la asignación de representación proporcional, lo que trae como consecuencia que la conformación del órgano legislativo no



refleje realmente la voluntad de los electores manifestada en las urnas, incidiendo negativamente en aspectos de representatividad al interior del órgano.

El señor Ministro Pérez Dayán precisó que, si bien los precedentes refieren a las coaliciones, en el caso (candidaturas comunes) la norma conlleva la inequidad para los partidos postulantes, por lo que resultan aplicables y estaría de acuerdo con el proyecto.

No obstante, reflexionó que el artículo impugnado contiene tres enunciados normativos, a saber: “(1) Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos que participan en la candidatura común, serán considerados válidos únicamente para el candidato postulado, (2) contarán como un solo voto (3) y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas”, siendo que el argumento central de los accionantes radica en la tercera parte, además de que en los precedentes se invalidó la parte que reproducía esto último. Adelantó que, de eliminar totalmente el precepto en cuestión, es decir, de eliminarse sus enunciados primero y segundo, se generaría un vacío legal que repercutiría en la prudente y correcta conducción de las elecciones próximas a celebrarse, máxime que no fueron motivo de cuestionamiento por los promoventes.

Concretó que, aun estando de acuerdo con el proyecto, y tomando en cuenta lo discutido en los precedentes citados,

propondría la invalidez de las porciones normativas que indican “únicamente” y “sin que puedan ser”, lo cual reconduciría al sistema de reparto entre los partidos que participan en una candidatura común, aunado a que ello evitaría una interpretación que conduzca a entregar dos votos a cada partido o, en su caso, a cada candidato. Puntualizó que, aun de no aceptarse su propuesta, votaría en favor del proyecto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se expresó de acuerdo con el proyecto en sus términos, al estimar que se aviene a los precedentes, además de implicar una violación a una reserva de fuente, en la inteligencia de que las candidaturas comunes tienen que estar previstas en la Constitución local, lo cual no sucede en el caso, respecto de lo cual anunció voto concurrente. Estimó que no se podría fraccionar el párrafo como lo propone el señor Ministro Pérez Dayán dada la citada vulneración a la reserva de fuente.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz valoró como difícil la propuesta del señor Ministro Pérez Dayán porque el artículo 61, párrafo segundo, se impugnó en su totalidad por los accionantes, además de que, de anular las porciones precisadas, este Tribunal Pleno se sustituiría al legislador ordinario. Por esas razones, sostuvo el proyecto en sus términos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo apuntó que uno de los conceptos de invalidez en contra del artículo 61, párrafo segundo, consiste en una antinomia con el diverso precepto

237, fracción IX, estimando que el proyecto resuelve integralmente el tema al invalidar totalmente el primero de los numerales en los términos en que se formuló.

El señor Ministro Medina Mora I. indicó que es relevante anular toda la norma, como lo propone el proyecto pues, de lo contrario, existiría un problema de contradicción con el artículo 237. Aclaró que se ha definido que en coaliciones hay reserva de fuente, no en candidaturas comunes, por lo que no se tienen que seguir las mismas reglas. En ese sentido, se inclinó en favor de la propuesta.

El señor Ministro Pérez Dayán sugirió, así como se expresó en el precedente de la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, agregar que, dada la antinomia advertida, la norma que debe prevalecer en función de su constitucionalidad es la que permite el reparto equitativo de manera proporcional a los partidos de las candidaturas comunes. Adelantó que, de aceptarse esta modificación, votaría en favor de la propuesta.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz recalcó que, como aludió el señor Ministro Pardo Rebolledo, si se declara la invalidez del artículo 61, párrafo segundo, en su totalidad, y no se dice nada sobre el artículo 237, fracción IX, se entiende que prevalece este último, siendo que no debería darse una directriz al legislador de lo que tiene que hacer.

La señora Ministra Luna Ramos se pronunció de acuerdo con la declaración de invalidez propuesta, conforme

al precedente de la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, estimando que su contenido se contrapone al artículo 237, fracción IX, lo que ocasiona una falta de seguridad jurídica.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea concordó con el señor Ministro ponente Cossío Díaz, puesto que ante la impugnación de los promoventes se debe declarar inconstitucional o no todo el párrafo en aras de la seguridad o la claridad, no pretender fijar una interpretación integral de los preceptos combatidos porque resultaría extraordinariamente complicado, siendo que ello desnaturalizaría a la acción de inconstitucionalidad, además de que, en su caso, esto será materia del análisis de los efectos.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó de acuerdo con la propuesta al determinar que el artículo impugnado violenta el principio de representatividad previsto en la Constitución, al no permitir que los votos puedan distribuirse entre los partidos que conforman una candidatura común. Apuntó que esta solución deberá tomarse en cuenta por el órgano legislativo local para, en su caso, obrar como considere necesario.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 1: sistema de conteo de votos para partidos políticos que participen en candidatura común, consistente en declarar la invalidez del

artículo 61, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la cual se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea con el argumento adicional de la violación a una reserva de fuente en cuanto a que las candidaturas comunes deben regularse en las Constituciones locales, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas y Pérez Dayán con precisiones. El señor Ministro Presidente Aguilar Morales votó en contra. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente. La señora Ministra Luna Ramos reservó su derecho de formular voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las doce horas con cincuenta minutos y reanudó la sesión a las trece horas con diez minutos.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz presentó el apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 2: distribución del financiamiento público a los partidos políticos. Recordó que el Partido de la Revolución Democrática impugnó el artículo 65, apartado A, párrafo segundo, incisos a), numerales 1 y 2, y b), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y, en consecuencia de la votación tomada en el apartado de la legitimación, se analizaría la impugnación del Partido Sinaloense al artículo 65, apartado A, en su integridad. El proyecto propone declarar la invalidez

de estos preceptos en atención al precedente de la acción de inconstitucionalidad 5/2015, por considerarlas violatorias del artículo 116, fracción IV, constitucional, al no observar las bases establecidas en los artículos 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, esto es, porque modifica la forma y distribución del financiamiento público que corresponde a los partidos, ya que establece porcentajes distintos a los previstos en la Constitución, pues disminuye el porcentaje del treinta por ciento distribuible de forma igualitaria entre los partidos en un diez por ciento, con lo que se deja de garantizar la distribución equitativa establecida en la propia Constitución, además de que deja en desventaja a los partidos que no cuentan con un número importante de simpatizantes, por lo que no se garantiza el mínimo de distribución igualitaria establecido en los artículos 41, base II, inciso a), y 116, fracción IV, inciso g), constitucionales, que es del treinta por ciento del total del financiamiento público.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales precisó que este asunto tiene cierta urgencia en su resolución por la cercanía del proceso electoral respectivo y, dado que la mayoría de los temas ya fueron materia de diversos precedentes, exhortó a los señores Ministros a pronunciarse brevemente.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó de acuerdo con el sentido del proyecto, por consideraciones diferentes, pues deben examinarse los principios para lograr

un régimen equitativo de financiamiento para los partidos, en términos del artículo 116 constitucional.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 2: distribución del financiamiento público a los partidos políticos, consistente en declarar la invalidez del artículo 65, apartado A, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos con precisiones, Franco González Salas con diferentes consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Silva Meza reservó su derecho de formular voto concurrente.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz presentó el apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 3: del autofinanciamiento de los partidos políticos. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 65, apartado B, párrafos primero y segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa porque establece una fuente de financiamiento diversa a las contempladas constitucional y legalmente, respecto de la cual no existen precedentes. La propuesta explica que de los artículos 41, base II, y 116, fracción IV, incisos g) y h), constitucionales, así como 50, párrafos 1 y 2,

53, párrafo 1, y 56 de la Ley General de Partidos Políticos, sólo existen dos fuentes de financiamiento de los partidos políticos, el público y el privado. A partir de lo anterior, se precisa que, en relación con el financiamiento privado, si bien existe un amplio margen de configuración legislativa por parte de los Congresos locales para regularlo, existe una condición prevista en el artículo 116, inciso h), constitucional, referente al límite de las aportaciones de los militantes y simpatizantes de los partidos políticos, a partir de lo cual se advirtió que la norma controvertida, a diferencia de la estructura constitucional y legal, estableció tres fuentes de financiamiento: público, autofinanciamiento y privado, de lo cual deriva su inconstitucionalidad. Finalmente, aclaró que esta declaratoria de invalidez hace innecesario el estudio de los argumentos restantes.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció a favor del sentido del proyecto y algunas de sus consideraciones, especialmente en cuanto a los límites que debe tener el financiamiento privado; sin embargo, no participó del argumento referente a que el autofinanciamiento viola la Constitución y las leyes generales, pues es una figura del derecho electoral mexicano clasificado dentro del financiamiento privado, inclusive el artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos lo contempla.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales observó que, al parecer, el proyecto propone declarar la invalidez del



artículo 65, apartado B, pero únicamente se impugnaron sus párrafos primero y segundo, por lo que se deberían realizar las precisiones conducentes respecto de los párrafos tercero y cuarto.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz precisó que el proyecto propone declarar la invalidez del artículo 65, apartado B, párrafos primero y segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.

El señor Ministro Franco González Salas expresó la duda consistente en que, si el argumento es la inconstitucionalidad del autofinanciamiento, debería o no eliminarse todo el apartado B, reservando su criterio alusivo a que el autofinanciamiento, como parte del financiamiento privado, no es inconstitucional.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea concordó en que debería invalidarse todo el apartado B, por lo que estaría a favor del proyecto, pero por razones distintas, ya que en los precedentes, especialmente la acción de inconstitucionalidad 5/2015, ha sostenido que en este tema resultan aplicables los artículos 53 a 56 de la Ley General de Partidos Políticos, siendo que en este caso no se respetan. Adelantó que, en los efectos, estará por la invalidez extensiva del apartado C, pues prevé que el financiamiento se integre por aportaciones de los simpatizantes, siendo que en la ley general se establece que también puede ser de cuotas de militantes y de los propios candidatos.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz reiteró que la propuesta consistiría en declarar la invalidez del artículo 65, apartado B, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.

El señor Ministro Pardo Rebolledo estimó que la lógica del proyecto no es que el autofinanciamiento se considere inconstitucional, sino que se declara la invalidez del precepto porque al autofinanciamiento lo contempla como una categoría aparte del financiamiento público y el privado, siendo que, de acuerdo con las bases constitucionales y de la Ley General respectiva, forma parte del financiamiento privado. Por esa razón, coincidió con la declaración de invalidez propuesta, así como con la eliminación de todo el apartado B, pues debería incluirse el autofinanciamiento en el apartado C.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales coincidió en que se debe invalidar todo el apartado B, pero que ello se dejaría para la propuesta de efectos.

La señora Ministra Luna Ramos se pronunció de acuerdo con el sentido del proyecto, apartándose de algunas consideraciones, al estimar que dentro del autofinanciamiento se establecen cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros en activo, las cuales tienen sus propias reglas que no están dentro del

autofinanciamiento, lo cual será motivo de un voto concurrente.

El señor Ministro Silva Meza se inclinó por los argumentos diferentes de la incorporación de las cuotas ordinarias y extraordinarias con una modalidad de financiamiento privado distinta al autofinanciamiento, y anunció voto en favor del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 3: del autofinanciamiento de los partidos políticos, consistente en declarar la invalidez del artículo 65, apartado B, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos en contra de algunas consideraciones, Franco González Salas separándose de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea por razones distintas, Pardo Rebolledo con precisiones, Silva Meza con observaciones en cuanto a los efectos, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Luna Ramos y Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. Los señores Ministros Pardo Rebolledo y Silva Meza reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz presentó el apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos,

en su tema 4: de la propaganda restrictiva al derecho humano a expresar y difundir libremente, por cualquier medio, ideas, opiniones e información. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 69, párrafo primero, en la porción normativa que cita “y coaliciones”, párrafo segundo, en las porciones normativas que indican “coaliciones”, “ofensa, difamación o” y “que denigre”, y párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa porque, en primer término, alude a la propaganda que puede ser contratada por las coaliciones en medios masivos de comunicación, tema sobre el cual cobra aplicación el precedente de la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, en el sentido de que las entidades federativas no se encuentran facultadas para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, por lo que se propone declarar la invalidez del artículo impugnado únicamente en las porciones normativas en las que se hace referencia a coaliciones tanto del primero como del segundo párrafo; en segundo término, ya que en cuanto a la restricción de la libertad de expresar y difundir libremente por cualquier medio ideas, opiniones o información, el precepto no supera un examen de escrutinio estricto y, por lo tanto, se propone su invalidez, ello aplicándose lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 35/2014, en la cual se determinó que lo dispuesto en el artículo 41, base III, apartado C, constitucional, sólo protege a las personas frente a las calumnias, siendo que, en el caso, las expresiones “ofensa, difamantes o que puedan llegar a

denigrar a las personas dentro de una contienda electoral” no superan la primera grada del escrutinio estricto, ya que no se encuentran protegidas constitucionalmente; y en tercer término y supliendo la deficiencia de los argumentos planteados, en tanto que la definición de calumnia del párrafo tercero del precepto en cuestión resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 41, base III, apartado C, de la Constitución, además de que no se ajusta con la interpretación que esta Suprema Corte considera ajustado y proporcional como término constitucionalmente permitido para restringir las libertades de expresión.

Aclaró que la propuesta de extensión de invalidez contenida en este apartado del proyecto se dejaría pendiente para el momento de evaluar los efectos de las declaraciones de invalidez decretadas.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales propuso dividir el estudio en dos: la cuestión relativa a la competencia para legislar en materia de coaliciones y lo atinente a la libertad de expresión. Sometió a discusión la primera parte.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que la norma impugnada regula lo relativo a la propaganda de las coaliciones, aspecto que no prevé el capítulo de coaliciones de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que puede ser regulado por las Legislaturas locales, razón por la cual se apartaría del proyecto.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó en contra del proyecto por razonamientos similares, como lo ha sostenido desde la primera vez que se analizó este problema.

El señor Ministro Pardo Rebolledo expresó estar en la misma situación.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales coincidió con el criterio de la señora Ministra Luna Ramos, recordando que en los precedentes de las acciones de inconstitucionalidad 22/2014, 86/2014 y 42/2015 ha votado en contra al considerar, por una parte, que la simple repetición de la legislación general no deviene inconstitucional y, por otra parte, porque se trata de un tema no reservado a la Federación.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz aclaró que el estudio se hizo en suplencia de la queja, pero se podría eliminar dependiendo de la votación final.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales recordó que se desestimó un tema semejante en la acción de inconstitucionalidad 22/2014.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación intencional la propuesta del apartado VI, relativo a la falta de competencia del legislador local para regular en materia de coaliciones, consistente en declarar la invalidez del artículo 69, párrafo primero, en la porción normativa que cita “y coaliciones”, y párrafo segundo, en la porción

normativa que indica “coaliciones”, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto de la cual se manifestó una mayoría de siete votos a favor de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas y Pérez Dayán. Los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo y Presidente Aguilar Morales se manifestaron en contra.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz, en atención al resultado de esta votación, modificó el proyecto para eliminar la propuesta de declaración de invalidez de las referidas porciones normativas de los párrafos primero y segundo del artículo 65, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales determinó continuar el análisis del asunto para la siguiente sesión, por lo cual deberá permanecer en la lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con cuarenta minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves quince de octubre de dos mil quince, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

*Sesión Pública Núm. 106*

*Martes 13 de octubre de 2015*

"En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".